

## TEMA 41. EL DELITO ECONOMICO. EL CODIGO PENAL Y EL DELITO ECONOMICO. EL BLANQUEO DE CAPITAL. LOS DELITOS FISCALES. LOS PARAISOS FISCALES.

### 1. EL DELITO ECONÓMICO

El delito económico tiene su origen en la época del imperio de los Austrias en el siglo XVII. Tal y cómo lo define la ONU: El término "delitos económico y financiero" se refiere, en términos generales, a cualquier delito no violento que da lugar a una pérdida financiera. Estos delitos, por lo tanto, comprenden una amplia gama de actividades ilegales, incluidos el fraude, la evasión tributaria y el blanqueo de dinero. La categoría de "delincuencia económica" es difícil de definir y su conceptualización exacta sigue siendo un reto. La tarea se ha ido complicando a raíz de los adelantos rápidos en las tecnologías, que ofrecen nuevas oportunidades para la comisión de tales delitos. La extensión general del fenómeno es difícil de determinar, en parte debido a la falta de un concepto claro y aceptado, al hecho de que los sistemas para registrar la delincuencia económica y financiera difieren enormemente de un país a otro, y a que algunos casos no se notifican porque las compañías y las instituciones financieras optan por resolver los incidentes internamente.

La delincuencia económica se distingue del resto por:

1. La lesión de la confianza en el tráfico mercantil.
2. El uso de la credulidad o ignorancia de la víctima, una especial astucia (apariencia legal del hecho) o afección de vastos sectores de la población, e incluso a países enteros. Todo lo dicho torna prácticamente imposible la identificación del autor

3. La circunstancia de que la sociedad tenga conciencia de la ilicitud del hecho pero no de su trascendencia criminal.

4. La imagen de honorabilidad del autor, debido a su posición política, social y económica. Su respetabilidad obligó a establecer una relación cercana entre poder económico y poder político.

5. La escasa visibilidad del delito.

6. La volatilización de la cantidad de víctimas.

7. Las estructuras anónimas de comunicación.

8. El no aparecer en las estadísticas criminales a pesar del alto costo social causado; sea por la imposibilidad de desenmascararlos, o por los obstáculos para perseguirlas por vía de la administración de justicia penal.

## 2. EL CÓDIGO PENAL Y EL DELITO ECONÓMICO

Los delitos de índole económico y todos aquellos relacionados directa o indirectamente con el fraude, evasión de capitales, blanqueo, financiación ilegal y demás tienen cabida, en nuestro vigente código penal.

A continuación, se transcriben algunos de los artículos relacionados con los delitos económicos, blanqueo de capitales y demás de aplicación:

### CAPÍTULO VI - De las defraudaciones

#### Sección 1ª De las estafas

Artículo 248. 1- Cometan estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.

2- También se consideran reos de estafa:

a) Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro. b) Los que fabricaren, introdujeran, poseyeran o facilitaren programas informáticos específicamente destinados a la comisión de las estafas previstas en este artículo. c) Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero.

## CAPÍTULO VII - De las insolvencias punibles

Artículo 257. 1. Será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses:

1º El que se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores.

2º Quien con el mismo fin, realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación.

2- Lo dispuesto en el presente artículo será de aplicación cualquiera que sea la naturaleza u origen de la obligación o deuda cuya satisfacción o pago se intente eludir, incluidos los derechos económicos de los trabajadores, y con independencia de que el acreedor sea un particular o cualquier persona jurídica, pública o privada.

3- En el caso de que la deuda u obligación que se trate de eludir sea de Derecho público y la acreedora sea una persona jurídico pública, la

pena a imponer será de uno a seis años y multa de doce a veinticuatro meses.

4- Las penas previstas en el presente artículo se impondrán en su mitad superior en los supuestos previstos en los ordinales 1º, 4º y 5º del apartado primero del artículo 250.

5- Este delito será perseguido aun cuando tras su comisión se iniciará una ejecución concursal.

Artículo 258. El responsable de cualquier hecho delictivo que, con posterioridad a su comisión, y con la finalidad de eludir el cumplimiento de las responsabilidades civiles dimanantes del mismo, realizare actos de disposición o contrajere obligaciones que disminuyan su patrimonio, haciéndose total o parcialmente insolvente, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

## CAPÍTULO IX - De los daños

Artículo 263. 1- El que causare daños en propiedad ajena no comprendidos en otros títulos de este Código, será castigado con la pena de multa de seis a 24 meses, atendidas la condición económica de la víctima y la cuantía del daño, si éste excediera de 400 euros.

2- Será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses el que causare daños expresados en el apartado anterior, si concurriere alguno de los supuestos siguientes:  
1º Que se realicen para impedir el libre ejercicio de la autoridad o como consecuencia de acciones ejecutadas en el ejercicio de sus funciones, bien se cometiere el delito contra funcionarios públicos, bien contra particulares que, como testigos o de cualquier otra manera, hayan contribuido o puedan contribuir a la ejecución o

aplicación de las Leyes o disposiciones generales. 2º Que se cause por cualquier medio, infección o contagio de ganado. 3º Que se empleen sustancias venenosas o corrosivas. 4º Que afecten a bienes de dominio o uso público o comunal. 5º Que arruinen al perjudicado o se le coloque en grave situación económica.

### CAPÍTULO XIII - De los delitos societarios

Artículo 290. Los administradores, de hecho o de derecho, de una sociedad constituida o en formación, que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios, o a un tercero, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. Si se llegare a causar el perjuicio económico se impondrán las penas en su mitad superior.

Artículo 291. Los que, prevaliéndose de su situación mayoritaria en la Junta de accionistas o el órgano de administración de cualquier sociedad constituida o en formación, impusieren acuerdos abusivos, con ánimo de lucro propio o ajeno, en perjuicio de los demás socios, y sin que reporten beneficios a la misma, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido.

Artículo 292. La misma pena del artículo anterior se impondrá a los que impusieren o se aprovecharen para sí o para un tercero, en perjuicio de la sociedad o de alguno de sus socios, de un acuerdo lesivo adoptado por una mayoría ficticia, obtenida por abuso de firma en blanco, por atribución indebida del derecho de voto a quienes legalmente carezcan del mismo, por negación ilícita del ejercicio de este derecho a quienes lo tengan reconocido por la Ley, o por cualquier otro medio o procedimiento semejante, y sin perjuicio de castigar el hecho como corresponde si constituyese otro delito.

Artículo 293. Los administradores de hecho o de derecho de cualquier sociedad constituida o en formación, que sin causa legal negaren o impidieren a un socio el ejercicio de los derechos de información, participación en la gestión o control de la actividad social, o suscripción preferente de acciones reconocidos por las Leyes, serán castigados con la pena de multa de seis a doce meses. Artículo

294. Los que, como administradores de hecho o de derecho de cualquier sociedad constituida o en formación, sometida o que actúe en mercados sujetos a supervisión administrativa, negaren o impidieren la actuación de las personas, órganos o entidades inspectoras o supervisoras, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses.

Además de las penas previstas en el párrafo anterior, la autoridad judicial podrá decretar algunas de las medidas previstas en el artículo 129 de este Código.

Artículo 295. Los administradores de hecho o de derecho o los socios de cualquier sociedad constituida o en formación, que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraigan obligaciones a cargo de ésta causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios, depositarios, cuentapartícipes o titulares de los bienes, valores o capital que administren, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido.

Artículo 296. 1- Los hechos descritos en el presente capítulo, sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Cuando aquélla sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal. 2- No será precisa la denuncia exigida en el apartado anterior cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una

pluralidad de personas. Artículo 297. A los efectos de este capítulo se entiende por sociedad toda cooperativa, Caja de Ahorros, mutua, entidad financiera o de crédito, fundación, sociedad mercantil o cualquier otra entidad de análoga naturaleza que para el cumplimiento de sus fines participe de modo permanente en el mercado.

#### CAPÍTULO XIV - De la receptación y el blanqueo de capitales

Artículo 298. 1- El que, con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, en el que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo, o reciba, adquiera u oculte tales efectos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años. 2- Esta pena se impondrá en su mitad superior a quien reciba, adquiera u oculte los efectos del delito para traficar con ellos. Si el tráfico se realizase utilizando un establecimiento o local comercial o industrial, se impondrá, además, la pena de multa de doce a veinticuatro meses. En estos casos los Jueces o Tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria, por tiempo de dos a cinco años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco años. 3- En ningún caso podrá imponerse pena privativa de libertad que exceda de la señalada al delito encubierto. Si éste estuviese castigado con pena de otra naturaleza, la pena privativa de libertad será sustituida por la de multa de 12 a 24 meses, salvo que el delito encubierto tenga asignada pena igual o inferior a esta; en tal caso, se impondrá al culpable la pena de aquel delito en su mitad inferior.

### 3. EL BLANQUEO DE CAPITALS

La política de prevención del blanqueo de capitales surge a finales de la década de 1980 como reacción a la creciente preocupación que planteaba la criminalidad financiera derivada del tráfico de drogas. El riesgo de penetración de importantes sectores del sistema financiero por parte de las organizaciones criminales, al que no proporcionaban adecuada respuesta los instrumentos existentes, dio lugar a una política internacional coordinada, cuya más importante manifestación fue la creación en 1989 del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Las Recomendaciones del GAFI, aprobadas en 1990, pronto se convirtieron en el estándar internacional en la materia, constituyéndose en la inspiración directa de la Primera Directiva comunitaria (Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991).

Se entenderá por bienes procedentes de una actividad delictiva todo tipo de activos cuya adquisición o posesión tenga su origen en un delito, tanto materiales como inmateriales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, así como los documentos o instrumentos jurídicos con independencia de su forma, incluidas la electrónica o la digital, que acrediten la propiedad de dichos activos o un derecho sobre los mismos, con inclusión de la cuota defraudada en el caso de los delitos contra la Hacienda Pública.

Se considerará que hay blanqueo de capitales aun cuando las actividades que hayan generado los bienes se hubieran desarrollado en el territorio de otro Estado. Existe un marco normativo muy amplio de decretos y leyes de aplicación directa o subsidiaria; no obstante, nos centraremos en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. A continuación, se reproduce íntegramente algunos artículos de la citada Ley:



## Artículo 1. Objeto, definiciones y ámbito de aplicación

1. La presente Ley tiene por objeto la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica mediante el establecimiento de obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

2. A los efectos de la presente Ley, se considerarán blanqueo de capitales las siguientes actividades: a) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva, con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a personas que estén implicadas a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos. b) La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva. c) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de la recepción de los mismos, de que proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva. d) La participación en alguna de las actividades mencionadas en las letras anteriores, la asociación para cometer este tipo de actos, las tentativas de perpetrarlas y el hecho de ayudar, instigar o aconsejar a alguien para realizarlas o facilitar su ejecución.

Existirá blanqueo de capitales aun cuando las conductas descritas en las letras precedentes sean realizadas por la persona o personas que cometieron la actividad delictiva que haya generado los bienes. A los efectos de esta Ley se entenderá por bienes procedentes de una actividad delictiva todo tipo de activos cuya adquisición o posesión tenga su origen en un delito, tanto materiales como inmateriales,

muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, así como los documentos o instrumentos jurídicos con independencia de su forma, incluidas la electrónica o la digital, que acrediten la propiedad de dichos activos o un derecho sobre los mismos, con inclusión de la cuota defraudada en el caso de los delitos contra la Hacienda Pública. Se considerará que hay blanqueo de capitales aun cuando las actividades que hayan generado los bienes se hubieran desarrollado en el territorio de otro Estado.

3. A los efectos de la presente Ley, se entenderá por financiación del terrorismo el suministro, el depósito, la distribución o la recogida de fondos o bienes, por cualquier medio, de forma directa o indirecta, con la intención de utilizarlos o con el conocimiento de que serán utilizados, íntegramente o en parte, para la comisión de cualquiera de los delitos de terrorismo tipificados en el Código Penal.

Se considerará que existe financiación del terrorismo aun cuando el suministro o la recogida de fondos o bienes se hayan desarrollado en el territorio de otro Estado.

4. A los efectos de esta Ley y sin perjuicio de lo establecido en la Disposición adicional se considerarán países terceros equivalentes aquellos Estados, territorios o jurisdicciones que, por establecer requisitos equivalentes a los de la legislación española, se determinen por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. La calificación como país tercero equivalente de un Estado, territorio o jurisdicción se entenderá en todo caso sin efecto retroactivo

## Artículo 2. Sujetos obligados.

1. La presente Ley será de aplicación a los siguientes sujetos obligados:

a) Las entidades de crédito.

b) Las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida y los corredores de seguros cuando actúen en relación con seguros de vida u otros servicios relacionados con inversiones, con las excepciones que se establezcan reglamentariamente.

c) Las empresas de servicios de inversión.

d) Las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y las sociedades de inversión cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora.

e) Las entidades gestoras de fondos de pensiones.

f) Las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo y las sociedades de capital-riesgo cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora. g) h) i) j) k) l) Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles.

m) Los auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales.

n) Los notarios y los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.

ñ) Los abogados, procuradores u otros profesionales independientes cuando participen en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales, la gestión de fondos, valores u otros activos, la apertura o gestión de cuentas corrientes, cuentas de ahorros o cuentas de valores, la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de empresas o la creación, el funcionamiento o la gestión de fideicomisos («trusts»), sociedades o estructuras análogas, o cuando actúen por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria.

o) Las personas que con carácter profesional y con arreglo a la normativa específica que en cada caso sea aplicable presten los siguientes servicios a terceros: constituir sociedades u otras personas jurídicas; ejercer funciones de dirección o secretaría de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídicos; ejercer funciones de fideicomisario en un fideicomiso («trust») expreso o instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; o ejercer funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado y estén sujetas a requisitos de información conformes con el derecho comunitario o a normas internacionales equivalentes, o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.

p) Los casinos de juego.

q) Las personas que comercien profesionalmente con joyas, piedras o metales preciosos.

r) Las personas que comercien profesionalmente con objetos de arte o antigüedades. Las sociedades de garantía recíproca. Las entidades de pago.

Las personas que ejerzan profesionalmente actividades de cambio de moneda. Los servicios postales respecto de las actividades de giro o transferencia. Las personas dedicadas profesionalmente a la intermediación en la concesión de préstamos o créditos, así como las personas que, sin haber obtenido autorización como establecimientos financieros de crédito, desarrollen profesionalmente alguna de las actividades a que se refiere la Disposición adicional primera de la Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la legislación española

en materia de Entidades de Crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al Sistema Financiero.

s) Las personas que ejerzan profesionalmente las actividades a que se refiere el artículo 1 de la Ley 43/2007, de 13 de diciembre, de protección de los consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio.

t) Las personas que ejerzan actividades de depósito, custodia o transporte profesional de fondos o medios de pago.

u) Las personas responsables de la gestión, explotación y comercialización de loterías u otros juegos de azar respecto de las operaciones de pago de premios.

#### 4. LOS DELITOS FISCALES

El delito fiscal es aquel delito consistente en defraudar a la Hacienda Pública por un importe superior al fijado por la Ley. Se entiende que defrauda quien omite ingresos tributarios y deja de ingresar la cuota correspondiente.

El incumplimiento de las obligaciones fiscales normalmente constituye una infracción administrativa, sancionada por la Administración Tributaria mediante multa que puede ser recurrida en distintos órdenes incluido el jurisdiccional.

Pero junto a esta forma de sancionar las actuaciones ilícitas de carácter tributario, los ordenamientos jurídicos con un cierto grado de desarrollo, para una mayor protección de la Hacienda Pública, consideran delitos y no meras infracciones administrativas los incumplimientos fiscales de mayor gravedad, correspondiéndole a los

Juzgados penales instruir estos procedimientos y condenar, en su caso, estas actuaciones mediante las correspondientes penas.

No hay diferencias sustanciales entre el delito fiscal y las infracciones tributarias, se diferencian básicamente por razones cuantitativas, por su mayor gravedad, por la cuantía del resultado.

Para que exista delito y no infracción administrativa no es suficiente con dejar de ingresar la cantidad mínima fijada por la Ley para que sea considerada delito, sino que es necesario que de forma añadida, exista también el denominado elemento subjetivo del delito, es decir una actuación del sujeto tendente a evitar el pago.

El delito fiscal exige la existencia de una conducta intencional y deliberadamente dirigida a defraudar el pago, es decir el autor tiene que tener conocimiento de la existencia de una deuda o deber de ingreso tributario, omitiendo el ingreso mediante la infracción de los deberes formales.

El delito fiscal fue introducido en el Código Penal de España, con la Ley 50/77, que reformó el sistema fiscal con la llegada del régimen democrático.

Se introdujo el artículo 319, que tuvo una aplicación judicial muy reducida, existiendo apenas una decena de sentencias ocho años después de su instauración.

En 1985 se reformó su regulación, introduciéndose el delito contra la Hacienda Pública, que pasó a ser regulado en los artículos 349 y 350 del Código. En esta reforma se eliminó la prejudicialidad, que exigía un largo proceso administrativo de fijación de la deuda, antes de acudir a la denuncia judicial del delito.

En 1995 se reforma el artículo relativo al delito de defraudación y se dicta un nuevo Código Penal que asume esta nueva regulación, pasando su regulación al artículo 305 y siguientes.

El Código Penal de España regula en su título XIV del Libro II, los "Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social" (artículos 305 a 310), que engloba los delitos de defraudación tributaria, contra la Seguridad Social, cobro indebido de subvenciones y el delito contable.

El artículo 305 del Código Penal establece que comete este el que por acción u omisión defrauda a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local:

- ☐ eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubiesen debido retener o ingresos a cuenta de retribuciones en especie;
- ☐ obteniendo indebidamente devoluciones; o
- ☐ disfrutando beneficios fiscales de la misma forma.

En cualquier caso, es necesario que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta, o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de 120.000€.

La ley española fija un límite de 120.000€ de cuota defraudada para que exista delito fiscal, por debajo de esta cantidad se cometerá una infracción administrativa que podrá ser perseguida por la correspondiente Administración tributaria.

La cuantía de la cuota defraudada es un elemento inexcusable del delito y por tanto su cuantificación corresponde a los Tribunales, que

procederán a fijar su importe de acuerdo a la legislación fiscal vigente.

Aunque el artículo 305 que regula el delito no indica nada acerca del dolo necesario en la conducta del que comete el delito fiscal, ha de ser entendido que su exigencia se encuentra implícita en la expresión defraudar y que además el artículo 12 del Código Penal establece que las acciones imprudentes sólo se castigarán cuando expresamente disponga la ley.

Para el delito de defraudación, regulado en el artículo 305 del Código, se prevé una pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la cuantía dejada de ingresar.

## 5. LOS PARAÍSOS FISCALES

Para iniciar la explicación del trasfondo de los paraísos fiscales, recordando qué es el dinero: monedas, billetes, cheques, tarjetas de débito o de crédito, préstamos, hipotecas, bonos del Tesoro, acciones, etc...

Porque si, a modo de introducción, nos paramos a pensar de qué se trata realmente, comprenderemos mejor qué son los paraísos fiscales y cuál es su papel como parte de los mercados financieros o de la globalización financiera.

Y sobre todo, percibiremos más claramente las consecuencias de las mutaciones profundas que se han sucedido en los últimos años, entre las cuales se cuentan la aparición de esos países y territorios, islas o enclaves, por donde fluye en la opacidad el dinero de la droga, de los delitos económicos y de la corrupción, de la especulación, de la financiación de los grupos terroristas y de los negocios poco claros. El dinero surgió en los albores de la humanidad para simplificar y facilitar el intercambio de las cosas que nos eran útiles (obviamente un fracaso de misión como se puede observar hoy día que pocas



cosas hay que compliquen tanto la vida de la gente cómo el dinero), tan pronto unos cuantos humanos comenzaron a relacionarse pacíficamente y a cooperar entre sí para atender sus necesidades vitales de alimentación, vestido y alojamiento: surgió de la necesidad de cambiar la pieza cazada por la fruta recolectada: el trueque que suele reaparecer entre gentes marginadas de la sociedad que en su mundo de miseria vuelve a la vida primitiva.

Pero a alguien se le ocurrió utilizar algo para facilitar esos intercambios, algo físico que solía aceptarse aunque ni se consumía ni tenía una utilidad inmediata y a eso se llamó dinero (sin duda uno de los peores inventos de la humanidad).

Tenía que ser algo que indiscutiblemente todo el mundo lo aceptara porque era valioso y apreciado por su escasez y también físicamente de material no perecedero, que aguantara la manipulación por los humanos, aunque esto último nunca fue una condición imprescindible: durante la Segunda Guerra Mundial, en algunos lugares de Alemania los cigarrillos se utilizaron como dinero para adquirir víveres.

Pero lo importante y lo básico en el dinero es la confianza que la gente le otorga por las razones que sea. Eso vale también hoy para el dólar de los EEUU que se acepta internacionalmente, aunque quien gestiona su emisión tenga un endeudamiento enorme con todo el resto del mundo y nadie le controle su producción monetaria.

Desde luego, está claro que el dinero es un producto de la evolución social y que sirve para la vida en sociedad porque solo aparece cuando surge la convivencia "pacífica" entre los humanos e incentiva el progreso de cualquier sociedad.

El dinero es la base de esas actividades que llamamos económicas porque satisfacen las necesidades humanas con los medios y

productos escasos disponibles: en la medida que un producto natural escasea se convierte en objeto de compraventa, es decir, entra en la actividad económica; el agua es un buen ejemplo de nuestro tiempo. ¿Se comercializará también el aire puro cuando la contaminación sature nuestro ambiente?

El caso es que ahí tenemos las tres funciones básicas que cumple el dinero en cualquier sociedad:

- a) Facilita los intercambios comerciales de productos y de servicios.
- b) Es una medida del valor de los productos y de los servicios disponibles. (aunque esto dé lugar a que haya necios que confunden valor y precio, como decía el poeta)
- c) Y también sirve como depósito de valor o de reserva de capacidad de compra de bienes y servicios y de satisfacción futura de necesidades personales.

El dinero hoy se compra y se vende a sí mismo: son los llamados "productos financieros", desde las acciones de empresa o las letras del Tesoro hasta los seguros, las divisas, las hipotecas o los llamados derivados y otras formas muy sofisticadas con las que se reviste el dinero; todos ellos con un objetivo común: el efecto "boomerang" que consiste en que al final siempre vuelve al que ya lo tenía en un principio.

En las Bolsas de valores y en los mercados financieros se compran y se vende las diversas "formas de dinero" que no sirven para satisfacer directamente ninguna necesidad humana, que por si mismas ni crean riqueza ni crean empleo y que quienes las adquieren y venden buscan únicamente el aumento de su precio (le llaman creación de valor) para volver a vender.

Y sucede diariamente que se compran y venden acciones de empresa u otros títulos de valores solamente porque se espera que esas

acciones o el precio de ese valor va a aumentar, sin que a los compradores les interese qué produce esa empresa cuya propiedad representan las acciones o que hay detrás de ese “producto financiero” adquirido.

Cuanto más incierta sea esa espera, cuanta mayor sea la incertidumbre reinante, mayor será el riesgo y mayor podrá ser la ganancia posible y previsible. Pero todas esas operaciones de compra y venta de las diversas formas del dinero no sirven al intercambio de bienes y servicios, dejan en gran medida de relacionarse directamente con la economía productiva, la que crea riqueza y empleo satisfaciendo directamente las diversas necesidades humanas. Esas encarnaciones del dinero se justifican por sí mismas como medio para su propia multiplicación e innovación. Es la gran economía financiera, la economía de casino, que funciona hoy junto con la economía productiva.

Pero, ¿a qué llamamos paraísos fiscales? La expresión paraíso fiscal no es muy afortunada porque sugiere la idea de que aquel país donde se obliga a pagar impuestos es un infierno. Y eso no es cierto porque los impuestos son la base de la convivencia social organizada.

Los impuestos son la contraprestación de los servicios comunes que necesitamos y recibimos cuando convivimos en sociedad; cuanto más desarrollada y avanzada es una sociedad más impuestos son necesarios para satisfacer las necesidades colectivas que individualmente no podemos atender, como la educación de los hijos, la atención de la salud, la retribución en situación de desempleo, las pensiones y el cuidado de los ancianos, la seguridad pública, la disponibilidad de vías públicas, etc.

La expresión generalizada paraíso fiscal nosotros la aplicamos en sentido peyorativo pero hay quienes la utilizan en sentido positivo.

Y de hecho encontramos sitios en Internet y en la prensa que contraponen descaradamente el término paraíso fiscal al de “infierno fiscal”, defendiendo las actividades financieras de “refugio fiscal” (en inglés, tax haven) para no residentes en ciertas islas o enclaves geográficos y en algunos países repartidos por la geografía del planeta, que eximen del pago de impuestos. Es una defensa a ultranza de los contribuyentes adinerados que reivindican su derecho a escapar con sus fortunas de los impuestos del “infierno fiscal”, que serían aquellos Estados con sistemas tributarios progresivos para la financiación solidaria de la protección social, la educación y la seguridad de su población.

Hablando con rigor tenemos que precisar que el término paraíso fiscal es una valoración técnico-política acuñada por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) Término que, aún siendo polémico, nos sirve para designar a los países y territorios con escasa o nula tributación para las operaciones financieras y que aparecen relacionados periódicamente con hechos delictivos y escándalos financieros, que trascienden a los demás Estados, cuyas economías dañan facilitando la evasión fiscal y la delincuencia financiera de todo tipo globalizada.

A este respecto hay que estar alerta porque las divergencias terminológicas no son inocentes y responden a concepciones ideológicas contrapuestas, porque no existe un pensamiento único sino que las opciones son múltiples y la democracia requiere que se expliciten para que los ciudadanos tengan la oportunidad de escoger.

Muchas otras veces se trata de intentos de despistar e introducir confusión en un terreno de por sí complejo; así se habla de “países o territorios de baja tributación” para quitarle importancia a la cosa; otras veces se emplea la expresión inocua de “jurisdicción” como término genérico para denominar la demarcación jurídica, apellidado

offshore o extraterritorial porque la regulación se circunscribe a la actividad financiera de no residentes.

En ocasiones, la literatura comercial promociona “los paraísos fiscales” como refugios de alta rentabilidad y protección frente al Estado depredador de las fortunas individuales.

La única definición oficial de paraíso fiscal disponible desde los organismos económicos internacionales corresponde a la OCDE y solo se refiere al aspecto fiscal; pero resulta insuficiente porque ignora los otros aspectos del secreto bancario y de la desregulación que ofrecen para operaciones financieras enmarañadas, que han tratado de modo parcial y separadamente por otros organismos internacionales. Por eso también suele utilizarse la expresión paraíso fiscal y financiero.

En todo caso ahí radica la necesidad de una identificación previa, de precisar a qué le damos generalmente el calificativo de paraíso fiscal. Hasta ahora, el planteamiento fragmentado seguido por las organizaciones internacionales sobre esta realidad financiera, ha impedido abarcar la totalidad y la complejidad de este fenómeno y su papel en la globalización financiera y en el contexto internacional actual, porque no ha existido un propósito serio de erradicación de sus consecuencias negativas. Dejando a un lado su utilización en la promoción de ciertos lugares exaltando precisamente sus ventajas fiscales, la denominación paraíso fiscal, o su equivalente inglés “tax haven”, difícilmente la encontramos en los documentos de los organismos financieros internacionales que prefieren la denominación técnica de centro financiero extraterritorial (offshore financial center u OFC); a excepción de la OCDE que definió qué hay que denominar paraíso fiscal.

Cuando se habla de centro offshore, este calificativo en inglés de offshore, que significa literalmente “fuera de la costa”, en la terminología financiera se traduce por “extraterritorial”, porque se

aplica a la actividad financiera de las personas o entidades no residentes en ese país o territorio, que por no residir allí se les conceden privilegios legales y se le exime del pago de impuestos. Los calificados como paraísos fiscales no lo son nunca para sus habitantes sino para quienes los que utilizan sus bancos o los servicios financieros establecidos para los no residentes, sean personas particulares o entidades.

El Informe de la OCDE de 2000 incluyó una lista oficial de las 35 jurisdicciones fiscales offshore que al reunir los criterios identificativos quedaban clasificadas como paraísos fiscales, ofreciendo un procedimiento para que pudieran comprometerse a la eliminación de las prácticas fiscales nocivas antes de 2006, que no se ha cumplido.

En esta relación oficial no aparecen paraísos fiscales tan conocidos como las Bermudas, las Caimán, Chipre, Malta, Mauricio y San Marino porque se apresuraron a comunicar a la OCDE su compromiso anticipado de suprimir esas prácticas perjudiciales precisamente para no verse en esa lista negra; así fue porque en la OCDE como en el FMI solo las grandes potencias siguen y controlan los asuntos.

Los paraísos fiscales tienen su origen en la libertad de los movimientos internacionales de capitales que se introduce al suprimirse los controles establecidos en los diferentes Estados sobre los bancos y los mercados de capitales.

Todos los expertos están de acuerdo en que los paraísos fiscales offshore surgieron en los años sesenta a partir del mercado de los eurodólares en Europa. Los expertos del FMI han descrito el desarrollo de este mercado offshore en los años sesenta, en que se genera una masa de eurodólares fuera de los EEUU (las multinacionales, las bases militares, etc.) que, libre de las regulaciones del banco emisor, la Reserva Federal estadounidense, y liberada de las reglamentaciones locales de los distintos países

porque no era su moneda nacional, es gestionada libremente por la banca internacional que se estableció en islas y enclaves para funcionar con más libertad frente a los Estados. Y este desarrollo se acentúa en la década de los setenta con los petrodólares, acumulados por jeques árabes en bancos europeos, y los tipos de cambio flotantes surgidos del derrumbe del sistema de Bretton Woods al acabarse en 1971 la convertibilidad del dólar a oro.

Aumenta la actividad de todos los grandes centros financieros, favorecidos por la City de Londres, atraídos los capitales por la desregulación ofrecida por esas zonas de baja o nula fiscalidad, que contribuyen a una mayor circulación de los capitales nómadas en busca del beneficio rápido.

Estas actividades se iniciaron en Europa, principalmente en la City de Londres y se extendieron pronto a otros centros extraterritoriales u offshore, fundamentalmente Luxemburgo y las islas del Canal de la Mancha, y a las islas de Bahrein en Oriente Medio y Singapur, en Asia. Nacía así el mercado financiero offshore integrado por la red global de paraísos fiscales extraterritoriales.